



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ejecutivo
EJECUTANTE	Clara Victoria Martínez Arredondo
EJECUTADO	José Alejandro Guevara Bedoya
RADICADO	05-001-31-05-010-2022-00373-01
TEMA	Mandamiento de pago
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **009** de discusión de proyectos, dentro del proceso ejecutivo promovido por **CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO** contra **JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA**, con radicado 05-001-31-05-010-2022-00373-01.

- **AUTO RECURRIDO:**

Por auto del 22 de septiembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín NEGÓ el mandamiento de pago, al considerar que la obligación no es actualmente exigible, por cuando el pago de los honorarios profesionales está sometido a una condición.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la ejecutante, quien a través de su mandataria judicial la sustentó en los términos siguientes: *“El despacho niega mandamiento de pago por cuanto dice que el título no es claro, expreso y actualmente exigible, toda vez que indica que mi mandante se obligó a que efectivamente le entregaran el*

dinero de la sentencia administrativa en la cual se le reconocieron unos perjuicios al DEMANDADO. Sin embargo, el juzgado interpreta de manera cerrada la palabra RECAUDO, lo cual, al irnos a buscar su significado en el diccionario de la **RAE se indica que es COBRAR**. Situación que, si operó en el presente caso, puesto que mi mandante, una vez la sentencia administrativa de reparación directa se encontraba debidamente ejecutoriada procedió a **realizar el cobro de la misma**, presentando toda la documentación y cuenta de cobro ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en el año 2018, dándole la presente entidad un radicado interno de dicho cobro. Aunado a lo anterior, se debe traer a colación de que el juez debe interpretar todas las cláusulas del contrato y tenerlas en cuenta en su integridad. En el contrato de prestación de servicios objeto de la litis, se establece cual es el objeto y para que estaba contratado los servicios de mi mandante (...) Por lo anterior, mi mandante ejerció la defensa del señor JOSE ALEJANDRO GUEVERA BEDOYA, en calidad de DEMANDANTE del proceso de REPARACIÓN DIRECTA, en contra de la NACIÓN, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, MINISTERIO DE JUSTICIA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL, bajo el radicado Nro.05001-23-31-000-2008-01419-00, mediante la cual se perseguía la REPARACIÓN DEL DEMANDANTE. En virtual de la demanda indicada en el hecho anterior, en primera instancia en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA se condenó a la NACIÓN, FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA bajo el radicado Nro.05001-23-31-000-2008-01419-00 a favor del DEMANDADO por los daños y perjuicios ocasionados, y en segunda en el CONSEJO DE ESTADO, el 24 de mayo del 2017, se CONFIRMÓ la decisión del juez ad quo, condenándosele a pagar los siguientes perjuicios a favor del DEMANDADO (...) Es decir, mi mandante cumplió todas las labores a ella designada, ahora, una vez la sentencia administrativa de reparación directa en comento, se encontraba debidamente ejecutoriada procedió a realizar el cobro de la misma (no teniendo la obligación), presentando toda la documentación y cuenta de cobro ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en el año 2018, dándole la presente entidad un radicado interno de dicho cobro. Razón por la cual, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL efectivamente expidió resolución de pago de la sentencia. Ahora, si la intención de los contratantes era que mi mandante representará al DEMANDADO en un proceso EJECUTIVO, se hubiese indicado estrictamente en el objeto de la misma, sin embargo, no fue así, dado que el interés de las partes era la representación en el proceso administrativo, puesto que reitero, las partes indicaron que el objeto del contrato era (...) Por lo anterior, no se puede adicionar otro objeto como indica el despacho, en el cual indica que mi mandante debía hacer el recaudo de los dineros y el proceso ejecutivo si se requería, pues el objeto es claro. Por lo tanto, el despacho no se puede extralimitar en sus funciones en el ejercicio de examinar los requisitos para la admisión de la DEMANDA (...) De lo anterior dice que se le pagará a mi mandante bien de lo recaudado por la vía administrativa o vía judicial a mi mandante se le pagará el 40% de lo recaudado, esto es, de lo condenado a la NACION. Y ya se expidió resolución de pago entonces de dicha resolución entonces se le debe pagar el 40% a mi mandante. En dicha cláusula no se indica que mi mandante se obliga a realizar el proceso ejecutivo o el proceso del recaudo del dinero, puesto que como he reiterado es en la cláusula del objeto del contrato en el cual se indica para que se contrató los servicios de mi mandante. Por lo tanto, no se puede obligar a mi mandante realizar un proceso de regulación de honorarios puesto que ya el objeto al cual se obligó mi mandante

fue realizado. Ya se condenó a la NACIÓN por los perjuicios sufridos por los DEMANDADOS mediante una sentencia condenatoria. Por otro lado si el DEMANDADO decidió contratar con otra abogada para realizar el proceso ejecutivo del pago de la sentencia, él está libre de hacerlo puesto que mi clienta no fue contratada para ello en el contrato de prestación de servicios en comento, razón por la cual no le arguye al despacho indicar que mi mandante estaba en la obligación de realizar el cobro de la sentencia, ella solo se obligó a representar al DEMANDADO en el proceso de reparación directa y que se pagaría con el valor recaudado, en este caso, ya la resolución de pago de la sentencia fue expedida, por lo tanto de dicho dinero le deben pagar a mi mandante por los servicios de la representación del DEMANDADO en el proceso administrativo de REPARACIÓN DIRECTA. Caso contrario fuese que si mi mandante se hubiese obligado también a realizar el recaudo del dinero y la ejecución del mismo entonces ahí estaría un porcentaje superior por representar al DEMANDADO en dos procesos. En suma, el título ejecutivo contiene los requisitos establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso. La obligación es expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo (contrato de prestación de servicios), en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple revisión del título ejecutivo (se encuentra pactado cuando es el valor de los honorarios) y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. (No está pendiente de condición, por cuanto ya se cumplió a cabalidad con las obligaciones). Por otra parte, el presente despacho incurrió en el DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO.

- **ALEGATOS:**

Clara Victoria Martínez Arredondo: fueron presentados en términos similares a los expuestos con la sustentación del recurso de apelación, resaltando el significado de la palabra cobrar según la RAE. Que ejerció su mandato hasta la culminación del proceso ordinario, por lo que considera que tiene derecho a que se le paguen los honorarios pactados. Solicita como consecuencia se revoque la decisión de instancia y en su lugar se libre mandamiento de pago.

CONSIDERACIONES:

Por auto del 22 de septiembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín NEGÓ el mandamiento de pago, al considerar que la obligación no es actualmente exigible, por cuando el pago de los honorarios profesionales está sometido a una condición; la ejecutante muestra inconformidad con la decisión anterior, al señalar que la obligación que se

pretende reclamar no se encuentra condicionada por cumplirse a cabalidad con la obligación contratada.

Atendiendo a la inconformidad presentada por la ejecutante, el problema jurídico para resolver por esta Sala se circunscribe en determinar si con las actuaciones adelantadas hay lugar o no a librar mandamiento de pago.

Para resolver lo anterior se debe partir de las pretensiones de la demanda. Aspira entonces la ejecutante se libre orden de pago en su favor y en contra de José Alejandro Guevara Bedoya por el “40% (cuarenta por ciento) DE LO RECAUDADO de la SENTENCIA ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA, DIRECTA bajo el radicado Nro.05001-23-31-000-2008-01419-01, del 24 de mayo del 2017, del CONSEJO DE ESTADO, mediante el cual se condenó a la NACIÓN- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL a pagar a favor del demandante(JOSE ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA) las siguientes sumas de dinero: Por perjuicios morales para JOSE ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA, la suma equivalente en pesos a treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para JOSE ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA la suma de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.542.033,97). Que dicho porcentaje deberá pagarse de acuerdo a los perjuicios que se les condenó a la entidad demandada en la sentencia antepuesta, teniendo en cuenta la indexación a la fecha del presente año en el que se cancelará la sentencia al DEMANDADO, incluyendo los intereses moratorios que serán cancelados al DEMANDADO del pago de la sentencia por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. Porcentaje que de acuerdo a la resolución 1533 del 22 de julio del 2022, equivale a la suma de \$23.916.535 (VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO)”

Pues bien, el proceso ejecutivo parte de que exista certeza sobre el derecho reclamado, la cual debe estar contenida en un título que preste mérito ejecutivo, que debe cumplir unas condiciones esenciales, a saber: a) que haga prueba por sí mismo sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación; b) que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicial el juicio; y c) que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – acreedor- y ante quien puede ser exigido – deudor-.

Los requisitos de que la obligación sea expresa, clara y exigible, merecen entenderse en su cabal significado.

Obligación expresa. Esto significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. El documento entonces debe contener una obligación expresa, es decir, debe consignarse en él, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado.

Obligación clara. La claridad hace relación especialmente a su inteligibilidad, es decir que no sea equivoca ni confusa y que únicamente pueda entenderse en un solo sentido.

Obligación exigible. La exigibilidad significa que la obligación pueda pedirse, cobrarse o demandarse. La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. El plazo y la condición constituyen dos hechos que impiden la exigibilidad. El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. La *condición* es un acontecimiento futuro que puede suceder o no y suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se produzca el advenimiento del hecho.

Es necesario resaltar que el proceso ejecutivo de la referencia se encuentra en su etapa inicial, esto es, aquella donde se determina si hay lugar a librar mandamiento de pago soportado en un título ejecutivo complejo, que para el caso concreto es un contrato de prestación de servicios profesionales y las actuaciones adelantadas en el proceso judicial que se adelantara en contra la Nación- Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial.

Esta Sala del Tribunal coincide con las consideraciones del juzgador de primera instancia, toda vez que el pago de los honorarios profesionales, según se lee en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios, se encuentra condicionada al recaudo de los créditos en dinero que se obtuvieran como resultado del proceso contencioso administrativo. Allí, expresamente se pactó: “SEGUNDA. HONORARIOS: EL CONTRATANTE pagara por concepto de honorarios, las sumas de UN CUARENTA POR CIENTO (40%) DE LO RECAUDADO, bien por la vía administrativa o por la vía judicial.”

Insiste la ejecutante que el término recaudo significa cobrar. Además, que conforme a la sentencia, ya se expidió resolución de pago, por lo que considera que se le debe pagar el 40 %; no obstante, a criterio de esta Sala,

el término recaudo no va dirigido a cobrar, en su lugar, su significado es el de percibir, recoger o coleccionar. Por ello, el pago de los honorarios reclamados por la vía ejecutiva se encuentra condicionados al efectivo pago de las sumas de dinero objeto de sentencia y no solo a su cobro. Y es que, ante la ambivalencia del término recaudo, la hermenéutica del caso lleva a concluir que sería un error considerar que los honorarios obedecen al 40 % de lo cobrado y no de lo efectivamente pagado.

Atendiendo al condicionamiento reseñado en el contrato de prestación de servicios, la obligación por concepto de honorarios profesionales no es actualmente exigible, hecho que impide que lo reclamado puede cobrarse por la vía ejecutiva.

Con los argumentos anteriores, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por la ejecutante.

Sin costas procesales en esta instancia.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido en apelación de fecha y procedencia conocida.

Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 015 del 1° de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>